



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ejecutivo Laboral
Radicación: 05001-31-05-002-2022-00335-01
Demandante: John Jairo Gutiérrez Montoya
Demandado: Alejo de Jesús Ortiz Castro y Colpensiones
Asunto: Apelación auto que resuelve excepciones
Procedencia: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Tema: Excepciones prescripción y pago.

Medellín, noviembre quince (15) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante y por el apoderado del señor Alejo de Jesús Ortiz Castro, contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública celebrada el 11 de octubre de 2023, por medio de la cual se declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, dentro del proceso ejecutivo conexo instaurado por el señor John Jairo Gutiérrez Montoya en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y el señor Alejo de Jesús Ortiz Castro. Radicado 05001-31-05-

Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín

Calle 14 No.48-32. Edificio Horacio Montoya Gil. Medellín -Antioquia

002-2022-00335-01.

1.- ANTECEDENTES

El señor John Jairo Gutiérrez Montoya, por conducto de apoderada judicial, promovió demanda ejecutiva laboral conexa, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y el señor Alejo de Jesús Ortiz Castro, pretendiendo se libre mandamiento de pago a cargo de la persona natural por los siguientes conceptos: reajuste cesantías \$2.972.905; reajuste intereses a las cesantías \$133.130; reajuste de primas de servicio \$1.170.407; reajuste vacaciones \$853.881; diferencia en el pago de la indemnización por despido sin justa causa \$4.054.537; por la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo en cuantía de \$32.702.328 y a partir del 03 de diciembre de 2019, los intereses moratorios a la tasa máxima certificada para los créditos de libre asignación, sobre el valor adeudado por concepto de prestaciones sociales; por el capital insoluto de las costas procesales por valor de \$2.094.358, con los correspondientes intereses legales o indexación, igualmente, por los reajustes de los aportes en pensión y se ordene a Colpensiones E.I.C.E., realizar el cálculo actuarial de los reajustes correspondientes y cobrar los aportes al señor Alejo de Jesús Ortiz Castro.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 26 de julio del 2022, libró mandamiento de pago a favor del ejecutante y en contra del señor Alejo de Jesús Ortiz Castro por los conceptos solicitados: reajuste cesantías \$2.972.905; reajuste intereses a las cesantías \$133.130; reajuste de primas de servicio \$1.170.407; reajuste vacaciones \$853.881; diferencia por indemnización por despido injusto \$4.054.537; por la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a razón de \$45.419 diarios, que se causaron entre el 2 de diciembre de 2017 al 2 de diciembre de 2019, en cuantía de \$32.702.328, y a partir del 03 de diciembre de 2019, los intereses moratorios a la tasa máxima certificada para los créditos de libre asignación, sobre el valor adeudado por concepto de prestaciones

sociales \$5.130.322; por la suma de \$2.094.359 por concepto de costas y agencias en derecho del proceso ordinario laboral, más los intereses legales del 6% anual, desde la ejecutoria del auto de liquidación de costas, 4 de marzo de 2020 hasta el pago de la obligación, por el cálculo actuarial realizado por Colpensiones, por los reajustes de los aportes en pensiones por los periodos comprendidos entre el 15 de septiembre de 2008 y el 1° de diciembre de 2017, teniendo en cuenta, los valores reconocidos como salarios y pagos ya realizados, al igual que la interrupción desde octubre de 2010 hasta el 1° de febrero de 2012. Ordenó a Colpensiones E.I.C.E., realizar el cálculo actuarial de los reajustes correspondientes y cobrar los aportes en pensión calculados en favor del señor Jhon Jairo Gutiérrez Montoya a cargo de Alejo de Jesús Ortiz Castro.

El señor Alejo de Jesús Ortiz Castro, por intermedio de apoderado judicial dio respuesta a la demanda ejecutiva, formulando las excepciones de pago y prescripción y respecto de Colpensiones E.I.C.E., se tuvo por no contestada la demanda.

1.1.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES

En audiencia pública celebrada el 11 de octubre de 2023, el Juzgado de conocimiento, declaró parcialmente probadas la excepción de prescripción formulada por el apoderado judicial del señor Alejo de Jesús Ortiz Castro, respecto de las acreencias laborales relacionadas con los numerales primero, tercero y cuarto, del auto que libró mandamiento de pago; dispuso seguir adelante la ejecución, respecto de los numerales segundo y quinto, esto es, el cálculo actuarial en favor del ejecutante por los reajustes de los aportes en pensión, por los periodos comprendidos entre el 15 de septiembre de 2008 y el 1° de diciembre de 2017, teniendo en cuenta los valores reconocidos como salarios y los pagos ya realizados, al igual que la interrupción desde octubre de

2010, hasta el 1° de febrero de 2012 y condenó en costas al señor Alejo de Jesús Ortiz Castro.

1.2.- RECURSO

Ejecutante

La apoderada de la parte ejecutante interpuso el recurso de apelación, el cual sustenta en que entre el 03 de marzo de 2020 y el 6 de julio, fecha en la cual se radicó la demanda ejecutiva no transcurrieron más de 30 días, teniendo en cuenta la interrupción del Decreto 564 de 2020, por lo que no era procedente notificar al ejecutado personalmente ni aplicar el artículo 108 del Código Procesal del Trabajo, por cuanto la norma aplicar analógicamente, en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, es el artículo 306 del C.G.P., como lo ha precisado la Corte en sentencias STL734 y STL11194 de 2015, STL2147 de 2017, STL16463 de 2017, STL7811 y STL9656 de 2020. Con base en lo anterior, reitera que es evidente la extemporaneidad de la formulación de excepciones realizada por el señor Alejo de Jesús, las cuales deben ser rechazada de plano.

Arguyó que, si en gracia de discusión, se aplicara el artículo 108, evaluado los efectos del artículo 94 ibidem, tampoco podría configurarse la prescripción, pues la misma quedó debidamente interrumpida con dicha notificación, ello si se tiene en cuenta las suspensiones de términos judiciales que operó en la pandemia, conforme al Decreto 506 de 2020, el Acuerdo CSJANTA 20 N01 del 29 de junio de 2020, los acuerdo del 23 de julio de 2020 y del 30 de julio de 2020, pues si se realiza el recuento de los términos procesales con las correspondientes interrupciones y suspensiones de términos, no se supera el término trienal contado desde el auto que obedece lo resuelto por el superior notificado el 3 de marzo de 2020 y la notificación efectiva del mandamiento de pago, siendo aplicable además la prescripción del artículo 2536 del Código

Civil. Por lo anterior, solicita se tenga por no contestada la demanda y sean rechazadas las excepciones por extemporáneas.

Codemandado

Por su parte, el apoderado de del señor Alejo de Jesús Ortiz Castro, señaló que no es cierto que se adeuden los valores pretendidos al ejecutante, porque al ex trabajador se le liquidaron todos los conceptos legales derivados de la relación laboral oportunamente, no entendiendo cómo después de cinco años el ex trabajador reclama reajuste de las prestaciones sociales y que todas las peticiones y pretensiones de la parte demandante se cumplieron, agregando que igualmente operó el fenómeno prescriptivo.

1.3.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para formular alegatos la apoderada de la parte **ejecutante** insiste en que no operó el fenómeno prescriptivo respecto de los derechos reclamados, por cuanto el auto que libró mandamiento de pago se notificó por estados a las partes, sin que la ejecutada hubiera formulado excepciones en forma oportuna, siendo aplicable el artículo 306 del Código General del Proceso, el cual regula el trámite de ejecución de condenas de providencias judiciales, que la solicitud de ejecución se presentó dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, puntualmente transcurridos 21 días, considerando además, que resulta aplicable contabilizar los 30 días, no desde la ejecutoria de la sentencia, sino desde el auto de obediencia a lo resulto por el superior, por lo que solicita se revoque la decisión.

A su turno, el apoderado del **ejecutado**, solicitó se revoque las costas y agencias en derecho, pues al operar el fenómeno prescriptivo, no hay lugar a cobrar las costas, reitera que durante la vigencia de la relación laboral todas las acreencias se pagaron oportunamente, observándose mala fe y temeridad en

todas las pretensiones del demandante, quien a pesar de realizar una transacción en el año 2017, para terminar la relación en debida forma, sigue abusando del ejecutado tratando de sacar más dinero sin ninguna justificación, solicitando se tenga en cuenta todo los argumentos de la contestación de la demanda.

Finalmente, la apoderada de **Colpensiones E.I.C.E.**, refirió que la obligación de hacer a cargo de la entidad, correspondiente a realizar el cálculo actuarial, se encuentra cumplida y en espera a que se realice el pago por parte del empleador, por lo cual no se debe continuar la ejecución contra Colpensiones por cualquier otro concepto.

2.- CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66 A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.1.- PROBLEMA JURÍDICO:

El problema jurídico a dirimir, radica en determinar

¿Si es procedente revocar el auto por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, para lo cual habrá de establecerse, si la notificación al ejecutado del auto que libró mandamiento de pago, debía surtirse por estados o personalmente? y, ¿Si hay lugar a declarar probada la excepción de pago?

2.2.- TESIS

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis según la cual, la notificación del auto proferido el 26 de julio de 2022, por medio del cual se libró mandamiento, debió surtirse por estados, en tanto que la solicitud de ejecución se presentó dentro de los treinta (30) siguientes a la ejecutoria del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, resultando extemporáneo el escrito de contestación de demanda y formulación de excepciones presentado por el apoderado judicial del señor Alejo de Jesús Ortiz Castro, razón por la cual deberá revocarse el auto objeto de apelación, para en su lugar, disponer que se continúe con la ejecución en los términos de la orden de pago.

2.3.- PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 442 del Código General del Proceso, establece:

“La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida”.

Bajo este marco normativo, quien es condenado judicialmente al pago de una obligación, solo puede exonerarse de su cumplimiento si acredita que la misma se ha extinguido por cualquiera de las formas legales.

Ahora, atendiendo al reparo efectuado por la apoderada del ejecutante, es menester en primer lugar, determinar si en efecto el mandamiento de pago debía ser notificado por estados, conforme la regulación del artículo 306 del Código General del Proceso, o si por el contrario era indispensable que se surtiera la notificación personal, tal y como lo dispuso el juez de primer grado.

Sobre el particular, se tiene que el citado artículo 306 del Código General del Proceso, dispone:

“Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente”. (subraya de la Sala).

Por su parte, el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en el capítulo XVI desarrolla el proceso ejecutivo, disponiendo en el artículo 108 lo siguiente:

“Las providencias que se dicten en el curso de este proceso se notificarán por estados, salvo la primera, que lo será personalmente al ejecutado, y solo serán apelables en el efecto devolutivo”. (subraya de la Sala).

Importa anotar, que jurisprudencialmente se ha admitido, la procedencia de dar aplicación analógica al artículo 306 del Código General del Proceso, en los procesos ejecutivos laborales que se proponen a continuación del proceso ordinario laboral, cuando la solicitud de demanda ejecutiva, se presenta dentro de los 30 días siguientes del momento en que se hace exigible la obligación.

Sobre el particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, precisó, lo siguiente:

“Al respecto debe indicarse que cuando el proceso ejecutivo se sigue a continuación del proceso ordinario, en los términos del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil -modificado para esa época por el artículo 35 de la Ley 794 de 2003 y aplicable por analogía del 145 del C.P.T., el auto de mandamiento de pago no se concibe como la primera providencia y por ende, su notificación debe surtirse por estados, como quiera que proviene de un proceso anterior en el que las partes fueron notificadas de las actuaciones allí surtidas”. (STL2147 de 2017)

Y en sentencia STL9656 de 2020, rememorando la STL16463 de 2017, recordó:

“Sobre la notificación de la providencia que dispone librar mandamiento de pago en un proceso ejecutivo a continuación del ordinario, ya la Sala se había pronunciado mediante providencia CSJ STL11194-2015, rad. 40872, en la que se precisó que:

“Es claro para esta Sala que ningún reproche merece la decisión del Tribunal al estimar que lo previsto en el art. 108 del CPL y SS, se aplica para «procesos ejecutivos que se promueven por primera vez y que son totalmente nuevos, y no aquellos que nacen a continuación de un proceso ordinario en que se ha impuesto condena a pagar una suma de dinero», teniendo en cuenta que «es apenas lógico que el demandado está enterado de la condena que se le impuso y sabe que la misma puede ser ejecutada a continuación dentro del mismo expediente y ante el mismo juez, por lo que debía estar atento, por lo menos dentro de los 60 días siguientes, al curso de acción que siguiera el acreedor

Ahora, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no ha sido diáfana en determinar el momento exacto a partir del cual debe computarse el término de 30 días que dé lugar a la aplicación del artículo 306 del Código General del Proceso, pues si bien en la sentencia STL7232 de 2023, citada por el a quo, la Corte luego de indicar que *“las fechas determinantes para establecer la modalidad de notificación que debe tener el mandamiento de pago son; (i) la de la ejecutoria de la sentencia cuando no se impugna, (ii) la del auto que ordenó obedecer lo resuelto por el superior y (iii) la de la solicitud de inicio del proceso ejecutivo”*, en el caso concreto, encontró que dicho término debía contabilizarse a partir de la fecha de la

sentencia de segunda instancia, derivando de tal data su ejecutoria, en los términos del artículo 302 del Código General del Proceso.

No obstante, en otros pronunciamientos, ha avalado que el término de los 30 días, se cuente a partir de la expedición del auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior, ejemplo de ello es la sentencia STL 7811 de 2020, en la cual, indicó: *“Bajo esos derroteros, una vez revisado el calendario de la Rama Judicial correspondiente al año 2018, se aprecia que si el auto de obedézcase y cúmplase fue proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el 20 de febrero de 2018 y notificado en estado del día 21 del mismo mes y año, el término de los treinta días contemplados en el artículo 306 del CGP, debía empezar a contarse al día siguiente del citado auto”*.

Y en igual sentido, en sentencia STL12147 de 2017, había indicado: *“Al revisar el caso en concreto, se encuentra que entre la data de notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, esto es el 27 de septiembre de 2010 y la fecha en que la demandante solicitó la ejecución de la sentencia proferida a su favor (22 de noviembre de 2010), habían transcurrido solo 55 días, de suerte que debió haberse ordenado que la notificación del mandamiento de pago se hiciera por estado y no personalmente”*.

Bajo tales supuestos, encuentra este Colegiado, que conforme al multicitado artículo 306, el término de los 30 días debe examinarse i) a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia o ii) a partir del auto que ordena obedecer lo resuelto por el superior, si fuere el caso, de consiguiente, en el sub lite es aplicable la segunda hipótesis, esto es, el término corre a partir del auto de cúmplase lo resuelto en segunda instancia, pues la norma no deja duda, que cuando la providencia sea impugnada debe contabilizarse el término a partir del referido auto y no desde la fecha de ejecutoria de la sentencia de segundo grado. Esta interpretación además de avenirse a la literalidad de la norma, es la interpretación más favorable y la que ajusta a la finalidad del auto de cúmplase, siendo esta la providencia a partir de la cual las partes se enteran que el

expediente ha sido devuelto al juzgado de origen y solo a partir de allí podría radicarse la demanda ejecutiva.

Aunado a ello, no puede pasarse por alto, que en el presente proceso también se persigue la ejecución de las costas procesales liquidadas en el proceso ordinario, las cuales solo se liquidaron mediante auto del 28 de febrero de 2020, no siendo factible escindir el título ejecutivo, compuesto por la sentencia de primera y segunda instancia y el auto que liquida las costas, a fin de determinar fechas de exigibilidad diferentes, tratándose de un mismo proceso.

En este contexto argumentativo, toda vez que el auto de cúmplase lo resuelto fue proferido, como ya se ha indicado, el 28 de febrero de 2020, notificado por estados del 3 de marzo de la misma anualidad y la solicitud de ejecución se radicó el 6 de julio de 2020, es claro, que no habían transcurrido 30 días, debiéndose tener presente la suspensión de términos judiciales que estuvo vigente entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, conforme a los Acuerdos N°PCSJA20-11517 de 2020, PCSJA20-11521 de 2021, PCSJA20-11526 de 2020, PCSJA20-11532 de 2020, PCSJA20-11546 de 2020, PCSJA20-11549 de 2020, PCSJA20-11556 de 2020 y PCSJA20-11567 de 2020.

Así las cosas, se colige que la notificación del auto que libró mandamiento de pago debía surtir por estados y toda vez que de dicha providencia se notificó en estados del 27 de julio de 2022, el pronunciamiento efectuado por la parte ejecutada, señor Alejo de Jesús Ortiz Castro, es a todas luces extemporáneo, asistiéndole razón a la apoderada recurrente, por lo que debe accederse a lo solicitado por la alzadista, teniéndose por no contestada la demanda ejecutiva y en tal sentido, no hay lugar a resolver las excepciones formuladas.

En adición a lo anterior, si se toma como punto de partida la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, el 18 de febrero del 2020 (15 días después de proferida la sentencia de segunda instancia, que data del 28 de

enero del 2020), también la solicitud de ejecución se encontraría presentada dentro de los 30 días.

Finalmente, advierte este juez plural que si en gracia de discusión, se tuviera por contestada la demanda, por encontrarse en firme la decisión, las excepciones formuladas estarían llamadas al fracaso, pues en relación con la excepción de prescripción, es claro, que la demanda ejecutiva se presentó, dentro del término de 30 días y no siendo exigible la notificación personal al accionado, no tiene aplicación el artículo 94 del Código General del Proceso.

Y en lo que respecta a la excepción de pago, no se allegó ningún medio probatorio que indicara la existencia de un pago, aunque fuera parcial, **con posterioridad** a la fecha en que se profieren las sentencias en el proceso ordinario, emergiendo evidente, que los argumentos planteados por el procurador judicial del señor Alejo de Jesús Ortiz Castro, tanto al contestar la demanda ejecutiva, como en la sustentación del recurso contra el auto que resolvió las excepciones, corresponde a situaciones anteriores que debieron debatirse en el proceso ordinario.

Colofón de lo anterior, se revocará el auto proferido el 11 de octubre de 2023 y en su lugar, se ordenará seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago proferido el 26 de julio de 2022.

Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutada, Alejo de Jesús Ortiz Castro, se fija como agencias en derecho la suma de \$580.000, en favor del ejecutante.

3.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,

RESUELVE:


PRIMERO: Se **REVOCA** el auto proferido el 11 de octubre de 2023, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por el señor John Jairo Gutiérrez Montoya en contra del señor Alejo de Jesús Ortiz Castro y la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y en su lugar, se **ORDENA** seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago proferido el 26 de julio de 2022.

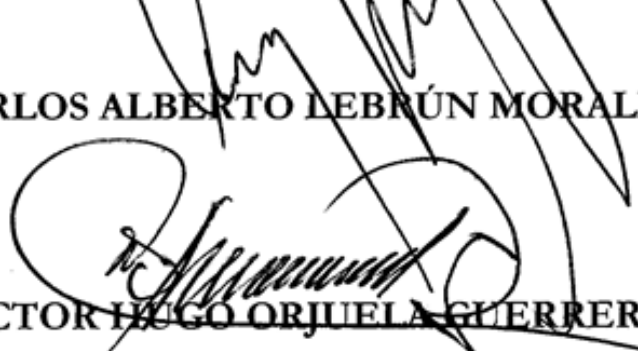
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutada, Alejo de Jesús Ortiz Castro en favor del ejecutante, se fija como agencias en derecho la suma de \$580.000.

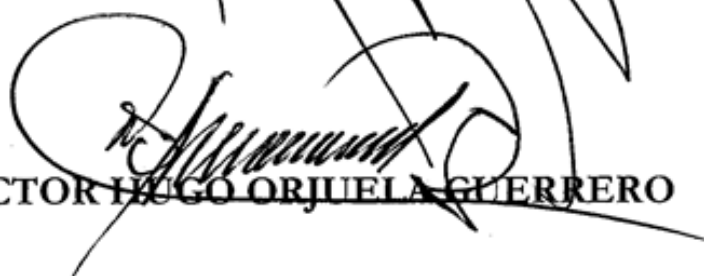
TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

El presente auto fue notificado en los Estado N°196 fijados en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 16 de noviembre 2023

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario